# Caza al inmigrante

JOSÉ CARLOS ROVIRA

Me enseñaron un vídeo de propaganda electoral de las últimas elecciones políticas italianas. Era de la «Liga Norte», el partido que más ha crecido de la coalición electoral berlusconiana. Un inmigrante de apellido eslavo explicaba en él que eran necesarias las nuevas leyes de control de la inmigración que propugnaba Umberto Bossi y su Liga: en Italia ya no cabían más y era necesario que no llegaran más para que, entre otras cosas, no peligrase el trabajo de los que ya eran inmigrantes estables, afincados en ciudades y trabajo. La lógica del mensaje no parece extraña, aunque sea perversa: algunos sujetos de la emigración planteaban el endurecimiento de la misma para los demás en aras de su propia seguridad.

El 29 de abril vencía como alcalde en la ciudad de Roma un fascista, que ha moderado su discurso en los últimos años, llamado Gianni Alemanno. No me preocupan tanto las imágenes en una de las escaleras en la sede del municipio, en Campidoglio, donde un grupo de personas vitorean al triunfador con el fascista «saludo romano», como el discurso que ha generado una victoria extraña: hay vídeos en internet en los que el nuevo alcalde centra su programa en seguridad, expulsión de emigrantes ilegales y atención a la familia italiana como eje de la sociedad. Roma será ciudad cerrada bajo la dirección, tras quince años de gobierno de centro izquierda, de quien en su primera juventud fue encausado por dar una paliza con su grupo neofascista a un joven estudiante de la izquierda, y por lanzar un cóctel molotov contra la embajada de la Unión Soviética. Todo un modelo moral de trayectoria para las nuevas generaciones, cuando hoy Alemanno modera su discurso y no canta ya «Facetta nera», a pesar de que hace unos meses y en un programa televisivo, no se sabe si como broma o provocación, hiciera el saludo fascista.

El nuevo líder italiano, Berlusconi (al que en un vídeo vemos también vitoreado en un acto electoral con los gritos de «Duce», «Duce») anuncia el cierre de fronteras para la inmigración y la creación de campos de identificación para los centenares de miles de sin papeles que hay en su país.

Los símbolos parecen menos peligrosos que los hechos y el endurecimiento de las posiciones contra los inmigrantes no hay que verlo ya en la Liga Norte, en los neofascistas o en el nuevo jefe de gobierno italiano, sino en una dinámica política que se está poniendo en el orden del día de Europa, donde se anuncia medidas próximas de endurecimiento de controles, de detención hasta dieciocho meses de los sin papeles para tramitar su expulsión, y de «retorno» de hasta ocho millones de personas que estarían en esta situación en el continente.

Aquí cerca hemos vivido estos días la propuesta sarkozyana de nuestra Generalitat que plantea un «Contrato de integración» como fórmula concreta para regular la situación futura de los inmigrantes. La fórmula ha sido cuestionada por sindicatos, partidos de la oposición valenciana y hasta por la misma Iglesia que, a través del obispo José Sánchez, responsable de las migraciones en la Conferencia Episcopal, ha planteado con claridad que el inmigrante «es como un muelle que se le deja subir fuerte cuando lo necesitamos y, cuando las cosas se ponen mal, que se vayan cuanto antes», haciendo ver que este tipo de leyes no están hechas a favor de los inmigrantes, sino a nuestro favor, regulando los flujos migratorios por leyes del mercado y no por principios de solidaridad y humanidad cristianos.

Creo oportuna y justa la voz del obispo Sánchez en un momento en el que el tema de la emigración va a endurecerse. La existencia de un contingente amplio de inmigrantes ilegales en Europa sólo puede realmente atajarse con un nuevo compromiso en el desarrollo de los países de origen de los mismos, y con un enfoque solidario con los que están ya aquí, evitando la criminalización de los mismos que se produce, tanto cuando se plantean campos de identificación, como cuando se vinculan discursos de emigración-delincuencia. La integración de los inmigrantes es una cuestión que determinan las leyes vigentes, los derechos y deberes que determinan éstas para todos y, desde luego, los entornos sociales en los que éstos viven. Una política social desarrollada y efectiva, en educación, sanidad, reconocimiento de derechos, es la mejor manera de integrarlos en un país que sea realmente de acogida. ❑

**José Carlos Rovira** es catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante.